

Economía

2

¿Cierre del ciclo neo-liberal después de un cuarto de siglo?

Hernán Frigolett *

* Académico. Integra el Grupo Nueva Economía

Síntesis

La administración Piñera pareciera ser el último ensayo para mantener el modelo neo liberal como eje conductor del desarrollo económico y social de la economía chilena. Finalmente, la concentración económica, la presencia transversal del lucro en la provisión de bienes públicas y la indefensión del consumidor en su presencia en el mercado, o la precaria solución previsional de la que goza la mayor parte de la población, presagian la irrupción de "Otro Modelo".

La dimensión distributiva ya no sólo pasa por un gasto público eficiente, sino que además se considera la fuente de los recursos tributarios que posibiliten simultáneamente un incremento de la carga tributaria así como un mejor cumplimiento de la misma. Para lograr impactos distributivos por el lado de los ingresos se requiere mayor apego al logro de la equidad vertical logrando un aporte efectivo de los sectores de mayores ingresos al Tesoro Nacional, pero al mismo tiempo de una equidad horizontal que cumpla con el axioma de igual carga a igualdad de renta independiente del origen de esta.

La sensación de abuso plasmó una persistente movilización social que se canalizó en la reciente elección presidencial en que las fuerzas progresistas se han alineado tras el programa esbozado por la Presidenta Bachelet. El plan de acción se ha centrado en tres dimensiones de reforma: educación como vehículo de igualdad de oportunidades, adecuadamente financiado por una reforma tributaria con objetivos de mayor recaudación y de impactos redistributivos, y en materia de un reordenamiento institucional para el futuro por la vía de la Gran Reforma de la Constitución. Los derechos sociales son un anhelo ciudadano que no están adecuadamente perfilados en la actual Carta Magna, y por ende se visualiza un proceso de reconfiguración del ordenamiento que permita la migración hacia "Otro Modelo de Desarrollo Económico y Social". Es necesaria la búsqueda de un nuevo equilibrio del quehacer público y privado, para emprender una nueva fase de desarrollo institucional, que permita articular el proceso de crecimiento y distribución más equitativa de sus frutos.

”

Hay que recordar que Piñera se instaló en La Moneda gracias al slogan del cambio, y que las cosas se harían con mayor eficiencia porque las capacidades gerenciales ahora estarían en el Estado Sin embargo, ya en el tercer cuarto el descontento afloraba por todos lados. La explicación fue que el problema radicaba en el marketing... Ese razonamiento es el que estaba en el centro de la incomprensión oficialista, ya que a todas luces el país no es una gran empresa, o un gran mall

La rebelión ciudadana frente a abusos económicos y ausencia de derechos sociales

Muchos en la centroderecha se preguntan cuál es el legado de la Administración Piñera, primer gobierno democrático con las bancadas de derecha en el oficialismo, luego de la dictadura militar. Hay que recordar que Piñera se instaló en La Moneda gracias al slogan del cambio, y que las cosas se harían con mayor eficiencia porque las capacidades gerenciales ahora estarían en el Estado y que por ende el impulso al crecimiento y al empleo sería el capital social que aseguraría la reelección para la coalición. Sin embargo, ya en el tercer cuarto el descontento afloraba por todos lados, y las encuestas eran muy desfavorables para el Presidente, el Gobierno y las bancadas oficialistas, pero la explicación era que el problema radicaba en el marketing de la magnífica gestión y de los resultados que se lograban. Justamente, ese razonamiento digno de una empresa es el que estaba en el centro de la incomprensión oficialista, ya que a todas luces el país no es una gran empresa, o un gran mall.

La ciudadanía espera que el Gobierno no sólo se preocupe de la gestión, sino que además pueda presentar una proyección de mejores oportunidades. Por cierto que las formas no son un detalle, y las personas esperan que la gestión no se centre sólo en los resultados que se pretende alcanzar, sino que además se cobre conciencia acerca de la relevancia de la participación y de la motivación de los trabajadores, de los funcionarios, de las organizaciones laborales y sociales. La complicidad es clave para lograr lidiar con el desafío del desarrollo social y económico.

La ciudadanía tuvo un despertar agitado, con manifestaciones que fueron convocadas desde distintas miradas a la insatisfacción social. Por un lado, el abuso del medioambiente puesto al servicio de capitales indolentes que negocian con la herencia de las generaciones futuras, y lo hacen con el chantaje del crecimiento y del empleo, ante lo cual los sacrificios son necesarios, y por otra parte, los estudiantes que se rebelan ante una educación cara, de mala calidad y que también ha generado una impronta lucrativa basada en la opción del consumidor como si la educación fuera un servicio cualquiera. Tal vez, la irritación llega a su máxima expresión cuando el lucro es desmedido ya no sólo para los sostenedores de colegios y universidades privadas, sino que además aparece la banca como cómplice lucrativo.

El sistema financiero cobra tasas excesivas contando con la garantía estatal a los deudores del sistema, y además entrega incentivos para que la banca participe, ante lo cual la irritación llega a su clímax para los estudiantes, pues ven perplejos que el Estado se había alineado con los intereses empresariales también en educación. La reforma de la educación pasa a ser un sentimiento para la ciudadanía que la derecha no logró comprender, pues para la Alianza se trataba de introducir ajustes, como

bajar la tasa de interés o incrementar la subvención escolar, y aún no han logrado ver la real demanda ciudadana.

Otro ámbito que ha surgido con fuerza en la opinión pública es la debilidad previsional del ciudadano, que luego de más de 30 años constata que la Gran Promesa Previsional de Piñera, el hermano mayor del ex Presidente, se había esfumado completamente con la crisis económica mundial del 2009. Los resultados están a la vista para los trabajadores próximos a retirarse de su vida laboral activa, pero ven con preocupación que su situación previsional será más precaria aún que su situación como trabajadores activos. Que les propongan ahora elevar las cotizaciones y que además deban seguir esperando para jubilarse a los 70 años es una provocación, sobre todo porque las propuestas provienen de los mismos que han estado a la cabeza del sistema que ha mantenido una rentabilidad a todo evento de las Administradoras de Fondos de Pensiones, sociedades con fines de lucro que han capitalizado todas las fallas de mercado que se les ha permitido desde la regulación.

En el caso de la salud, una situación similar ha surgido con las ISAPRES que han transformado la adopción del AUGE en una plataforma lucrativa para financiar las enfermedades de alto costo de mayor incidencia en la población chilena. Tanto las ISAPRES, como las AFP aparecen como las empresas de mayor rentabilidad en el contexto chileno, y paradójicamente son las que enfrentan el menor riesgo de mercado, porque la regulación ha permitido que estas empresas lo transfieran todo a los trabajadores y al Estado.

Los Servicios Públicos Regulados aparecen también en el mapa del abuso en Chile. Todas las empresas reguladas generan un EBITDA muy elevado que las transforma en empresas muy rentables, no sobre la base de operaciones eficientes, sino que de precios elevados que los consumidores no pueden eludir porque no hay opciones en el mercado, por tratarse de empresas monopólicas privatizadas pero reguladas de manera deficiente. Las empresas eléctricas están a la cabeza en el ranking, porque logran sustentar su rentabilidad principalmente por la aplicación de una política de precios monopolista que valida los elevados costos marginales de las plantas más antiguas que se mantienen en operación y que son las que rentabilizan las inversiones más recientes que incorporan algunas mejoras tecnológicas. Los precios de la electricidad se han elevado sustantivamente, con alzas de tal magnitud que el costo de la electricidad es de los mayores a nivel mundial, con el consiguiente impacto en el costo de vida de los chilenos y en la capacidad competitiva de las empresas nacionales.

En el caso de las empresas de comunicaciones, el sistema aparentemente se ve algo más competitivo, pero nuevamente las comparaciones internacionales dejan en evidencia que la relación precio calidad desfavorece al consumidor chileno, y la rentabilidad lograda es mudo

testigo de las falencias regulatorias. Tal vez en el caso de las empresas sanitarias se logre un mejor desempeño de la regulación por parte del Estado, pero las ciudades presentan de manera recurrente eventos de falencia de la infraestructura en uso que genera graves daños a la propiedad de las personas, o sufren de interrupciones de servicio con elevada frecuencia. Finalmente, las empresas concesionarias de carreteras urbanas e interurbanas aparecen también en la mira de los consumidores que ven tarifas elevadas, con rentabilidades en ascenso permanente en la medida que se ha incrementado sostenidamente el parque automotor de Chile.

Educación y Salud Pública en crisis estructural debido a persistentes procesos de selección que por un largo proceso ha decantado en establecimientos públicos que reciben a una población escolar con debilidades medulares derivadas de la condición socioeconómica desmedrada de sus progenitores. Los recursos destinados a los establecimientos no permiten que los proyectos educacionales puedan responder a las necesidades de los jóvenes e infantes que concurren a sus aulas, y por ende sus resultados en las pruebas estandarizadas son deficientes, cayendo entonces en un círculo vicioso en el que los recursos del Estado les son negados producto de sus bajos rendimientos.

El financiamiento público es claramente insuficiente para hacerse cargo de una formación integral de los alumnos en las comunas más desprovistas socioeconómicamente, ya que los municipios no cuentan con recursos que puedan direccionar a complementar el financiamiento público que reciben. La crisis no es económica únicamente, sino que también tiene raíces en los proyectos educacionales que no cuentan con la oferta necesaria de horas profesionales para complementar el currículo obligatorio con horas de reforzamientos y de apoyo psicopedagógico para contrarrestar el pecado de origen de la población escolar de las comunas de menores ingresos. Las estadísticas son contundentes al momento de evaluar los resultados obtenidos de maneta persistente en las pruebas estandarizadas de los distintos niveles de la educación escolar.

Los intentos por mejorar el perfil de los estudiantes de pedagogía no sólo depende de reducir los costos de la educación por la vía de becas atractivas, que no son conducentes si no se resuelve el problema de fondo ligado a las bajas remuneraciones medias que se observan en el magisterio en comparación a las obtenidas por otras profesiones, en carreras igual de largas y con exigencias similares. Los centros de formación del profesorado también presentan una gran heterogeneidad en cuanto a la calidad y exigencia de establecimiento privados y públicos, que no pueden dar con un currículo académico congruente con la problemática que en promedio les tocará enfrentar en la realidad educacional del país.

Indicadores Globales: final amargo y comprometedor

La economía mundial aún se encuentra en un ciclo de recuperación de la Gran Crisis de 2009. Cabe recordar que la crisis mundial de 1929 fue también muy profunda y la recuperación llevó prácticamente una década, y la magnitud de la de 2009 también requerirá de al menos una década para ser superada.

La economía de la Zona Euro ha tenido un desempeño errático en el que han prevalecido situaciones recesivas y de estancamiento que no han permitido superar la depresión inicial. Los niveles de desempleo han persistido con el consiguiente impacto en la demanda interna y en las expectativas empresariales que se reflejan en la inversión que tampoco ha reaccionado con lo cual el estancamiento no se supera. Estados Unidos también presenta una recuperación bastante lenta, con una persistente incertidumbre de la política fiscal debido a la confrontación política en la que los Republicanos han tenido éxito en mantener al Gobierno de Obama con la presión permanente de "abismo fiscal", debido a la contracción de la capacidad de financiamiento del gasto no autorizando, la emisión de deuda interna para financiar el déficit fiscal. La demanda interna de Estados Unidos muestra signos bastante débiles de repunte, mientras que el comercio exterior tampoco es fuente de aceleración de la recuperación del crecimiento económico.

Este contexto de estancamiento global ha tenido un impacto relevante en la desaceleración de China y Asia en general, porque la dinámica exportadora se encuentra muy debilitada debido al estancamiento o bajo crecimiento de los países de destino de la industria exportadora. El comercio mundial presenta una expansión aún moderada, que es modesta tanto en volumen del intercambio y en el precio de algunos productos relevantes para las economías en desarrollo, donde se instala la mayor capacidad productiva de las economías emergentes, en especial las de América Latina.

El Crecimiento mundial a la baja incide en el desempeño local, especialmente de los sectores exportadores que no logran compensar en el mercado externo la pérdida de dinamismo de los mercados internos. El ciclo de la inversión está muy ligado a las condiciones imperantes en la economía mundial, por cuanto la incertidumbre financiera ha obligado a una administración financiera más conservadora.

El ciclo de alto precio del cobre fue capitalizado por la Administración Piñera al impulsar una reforma tributaria regresiva, aprovechando el período de mayores ingresos fiscales provenientes de la Gran Minería del Cobre, así como de Codelco. El ciclo de precios elevados ha sido fuente permanente de subsidio a la baja carga tributaria efectiva, debido al menor cumplimiento de la misma por la profusión de mecanismos elusivos. Fue en este escenario que se planteó una reforma tributaria con un marcado sesgo regresivo, pero que en el corto plazo incrementaba la recaudación

debido al incremento del impuesto de Primera Categoría, que compensaba las rebajas aprobadas en los impuestos de las personas que benefició a todos los estratos de rentas. Este proceso tiene clara incidencia sobre la reforma tributaria presentada en el Programa de la Presidenta Bachelet, por cuanto el rendimiento de recaudación de las medidas que afectan la tributación directa es ahora menor, debido a la reducción de la tasa media de tributación de los ingresos personales.

En la coyuntura económica actual, una parte de la reforma tributaria será destinada a compensar los menores ingresos tributarios de la Gran Minería, y también de las rentas provenientes de las empresas públicas, especialmente las vinculadas a la explotación minera. El momento de presentación de la reforma es complejo porque coincide con un escenario externo poco dinamizador, y porque adicionalmente los consorcios transnacionales tampoco disponen de la liquidez de antaño, postergando así gastos de inversión en la economía real mundial, incluido por cierto Chile. Sin embargo, la reforma propuesta tiene un cariz estructural, poniendo el foco de su accionar en el mediano plazo con una estrategia de instalación muy gradual del nuevo marco tributario, que tiene como objetivo elevar la carga tributaria junto con un incremento sustantivo en el cumplimiento de la misma.

Mientras el Gobierno impulsa una reforma tributaria que proveerá los recursos para financiar acciones en la economía real vinculadas a la mayor provisión de bienes públicos, así como un incremento sustantivo en la calidad de los mismos, los analistas y especialistas tributarios ponen el énfasis en aspectos financieros y monetarios. Se está visualizando con dramatismo extremo los impactos de la reforma en los flujos de las empresas pequeñas y medianas, cuando en realidad las que están más complicadas son las empresas de mayor tamaño que son justamente el objetivo declarado de la nueva estructura tributaria. Los efectos sobre la PYME son bastante menores, así como los que puedan recaer sobre los pequeños accionistas o sobre los fondos de pensiones.

En general se adopta una postura de defensa de desvalidos que no poseen capacidad de gestión para sobreponerse a los cambios que presenta el entorno, en el cual por cierto que los cambios tributarios son frecuentes en las economías domésticas así como en los diversos mercados a los cuales se direccionan las exportaciones de Chile cada día. Los cambios son transparentes, oportunos en su comunicación y alcances para cada uno de los agentes económicos, que deberán tomar las providencias del caso para ajustar sus respectivos flujos de cajas, políticas de retiro o de distribución de utilidades. Las visiones que comprometen antojadizamente las condiciones de inversión y de empleo adolecen de una asimetría pasmosa, por cuanto entonces cuando se reduce la carga impositiva la economía irremediabilmente entraría en una fase de sobrecalentamiento y la respuesta inflacionaria sería de temer, desestabilizando a la

macroeconomía y afectando al crecimiento, razonamiento que caricaturiza el desarrollo de los detractores de la propuesta tributaria.

En el período 2010-2013, se registra estadísticamente una tenue mejora de aspectos distributivos -que es sin duda un resultado de la coyuntura- pero que no representa un cambio estructural sostenible. La comparación con la crisis de 2009 es un evento estadístico que proporciona un punto de partida auspicioso, que se complementó además con el proceso de reconstrucción que se financió con un incremento transitorio de la carga tributaria. Así, la creación de empleo junto a la evolución de las rentas promedio del trabajo dependiente, impulsaron la recuperación sostenida de los ingresos de los hogares aunque luego de dos años estos elementos comenzaron a disiparse. El cierre del año 2013 ya marcó la pauta en términos de la transitoriedad de los resultados en crecimiento y empleo, confirmando que se trató de impactos vinculados a una coyuntura interna y externa favorables, configurándose una desaceleración muy marcada en el segundo semestre de 2013 que está amenazando con dar paso a un estancamiento de la economía, que se materializará durante el primer semestre de 2014. El efecto cíclico tiene repercusión directa sobre las finanzas públicas, por cuanto los supuestos establecidos en el marco de la Ley de Presupuesto ya han quedado como muy improbables de acontecer, sino que por el contrario el crecimiento esperado es del orden de 3,5% y con sesgo a la baja.

Competitividad a la baja

Mientras el precio del cobre se mantuvo muy alejado de la referencia de largo plazo contemplada en el marco del Presupuesto de la Nación, y se mantenía un crecimiento en torno al de tendencia de largo plazo para la economía, el tipo de cambio se mantuvo con clara tendencia a la apreciación, prolongando el diagnóstico de Enfermedad Holandesa a la Chilena. El proceso de ajuste medianamente automático que aplica a economías abiertas, la desaceleración junto al incremento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, seguida luego de un ajuste brusco en el precio internacional del cobre, han revertido parcialmente la situación y el tipo de cambio se ha depreciado. El efecto sobre los flujos de los exportadores agroindustriales será significativo, pero en la medida que no se entrevea un cambio de mediano plazo, las decisiones de inversiones en la agroindustria se mantendrán expectantes a la espera de señales más contundentes en materia de tendencia cambiaria.

Otro de los cuellos de botella que apremian la sustentabilidad y competitividad productiva de la economía chilena, radica en la matriz energética. Se han consumido las holguras disponibles derivadas de la recesión de 2009 debido a la rápida recuperación observada en 2010 y 2011, pero la mayor presión de demanda se ha traspasado al algoritmo de fijación de precios. Paradojalmente, la aceleración del crecimiento y la

preocupación por su sostenibilidad han sido referidas a la fijación tarifaria basada en costos marginales de corto plazo. El escenario es apremiante para los clientes, pero se percibe un grado de conformismo por el lado de la oferta que cosecha buenos dividendos asociados al incremento sustantivo del EBITDA de la mayor parte de las empresas eléctricas que operan en el país. El desafío es aún más complejo cuando los efectos de la sequía han causado estragos en las centrales hidroeléctricas por la baja disponibilidad de recursos hídricos, tanto para fines de riego como para generación eléctrica. El contexto de cambio climático ha llegado para quedarse, con lo cual es cada vez más necesario contar con una estrategia muy clara acerca de los cambios necesarios de introducir a la matriz energética.

Una de las carteras ministeriales con mayores cambios fue la de Obras Públicas, que siempre se ha destacado por un accionar comprometido en un marco de planificación estratégica, que en la administración Piñera fue persistentemente interrumpida por cambios en los equipos directivos de ese ministerio. La infraestructura de conectividad y de riego han sido claves en el éxito del crecimiento económico de las últimas décadas, aunque en los últimos años la menor ejecución presupuestaria fue una constante en los proyectos de inversión real consignadas con cargo a Obras Públicas. La agenda de concesiones se mantuvo en constante evaluación más sin evidenciar un proceso de ejecución con impacto macroeconómico por cuanto no se adjudicaron obras cuya evaluación social ya se encontraba afinada. Se ha acumulado un rezago importante en materia de conectividad portuaria y aeroportuaria, mientras que las vías terrestres longitudinales muestran indicadores bastante deteriorados debido a inversiones que no se han materializado.

Una Agenda parcialmente definida para 2014-2018

Las movilizaciones sociales de 2011 y 2012 pusieron el acento de los reclamos en la triada de los apremios sufridos por los ciudadanos: educación, salud y previsión. El grueso de los trabajadores queda expuesto económicamente por los gastos de educación, principalmente cuando los hijos cumplen condiciones para acceder a la educación superior porque en la escolar y pre-escolar la acción de financiamiento público tiene mayor cobertura dejando un esfuerzo de copago mucho más acotado. En materia de salud, la cobertura del sistema público presenta problemas, y los hogares deben lidiar con pagos complementarios a los del seguro público, mientras que los segmentos de ingresos medios que contratan seguros privados de salud quedan bastante expuestos a la arbitrariedad de los prestadores. Finalmente, otro aspecto gravitante para la población se relaciona con el sistema de pensiones y jubilaciones, ya que las tasas de reemplazo son insuficientes, configurando un problema de política pública cada vez más apremiante, puesto que el grupo etario que crecerá más en los próximos años será el de la Tercera Edad.

El concepto de gratuidad de la educación ha planteado un debate que se inicia de manera más abierta, ahora que el programa de gobierno debe plantear una solución configurando el real alcance de la educación pública, y por ende de la asignación de recursos para conformar la gratuidad. Esta dimensión tampoco se percibe con claridad por parte de la ciudadanía, que no vincula la necesidad de la reforma tributaria para hacer realidad el acceso individual a la gratuidad de la educación. En efecto, no son los hogares individuales los que deben concurrir al financiamiento, sino que son recursos fiscales por la vía de becas o fondos directos asignados a las instituciones los que finalmente dan cuerpo a la gratuidad en la educación, especialmente en la superior, que es dónde mayor exposición financiera se aprecia para los hogares.

En materia de salud, los problemas son de una índole diferente por cuanto se trata principalmente de variaciones sistemáticas en las condiciones de cobertura de los seguros, especialmente los privados, y de las primas asociadas. Los reajustes reales de las primas de las ISAPRES son significativos, provocando impacto significativo en el presupuesto familiar, y muchas veces, generan impactos relevantes en materia de cobertura. El seguro público tiene problemas de cobertura por cuanto se presenta una oferta de especialidades insuficiente para cubrir las necesidades de la población, especialmente en regiones.

En materia previsional, se ha develado la compleja realidad del sistema privado de pensiones que ha sucumbido frente a la crisis internacional, y con problemas más de fondo se ha evidenciado una falencia más estructural de mayor alcance. La cotización de 10% de la renta imponible es insuficiente para lograr obtener una tasa de reemplazo de la remuneración que se aproxime al 70%, incluso para los trabajadores que cumplen con una elevada densidad de cotizaciones porque la rentabilidad promedio alcanzada por los fondos es inferior al 5% contemplado en el diseño del sistema privado. Otro ámbito que causa problemas se refiere al costo de administración que no aprovecha economías de escala, y las comisiones aplicadas no son un buen incentivo para que se maximice la renta de los Fondos de Pensiones administrados. El público cada vez tiene menos paciencia cuando las utilidades de los administradores se mantienen o aumentan mientras de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización bajan, y posteriormente se recuperan lentamente.

El diagnóstico es bastante claro en cuanto a la necesidad de un cambio profundo, pero las propuestas divergen en función de los intereses corporativos de quiénes las hacen. El debate con respecto a los beneficios del sistema de capitalización y el de reparto ha resurgido, pero la pertenencia a la OCDE proporciona antecedentes más transparentes con respecto a los sistemas en operación con sus respectivas fortalezas y debilidades. Al parecer un aumento de la cotización es necesario, pero la concurrencia bipartita de trabajadores y empresarios es ahora parte de la

discusión, porque la relevancia del sistema previsional sobre la distribución del ingreso es de relevancia en el contexto de la economía chilena.

En el plano productivo, los apremios de la pequeña empresa han irrumpido con gran fuerza en el debate económico: se marcan problemas ligados a la carga comercial y financiera, por un lado, y por otro, costos de distribución y de energía que inciden todos de manera significativa en la rentabilidad de las PYME, que finalmente ven muchas dificultades para emprender e invertir en infraestructura y tecnología. Se plantea con mucha vehemencia el impacto de la reforma tributaria sobre los flujos de las empresas, pero cuando la presión viene de los privados se recurre a razones de mercados, olvidando muchas veces que la referencia es de mercados oligopólicos o monopsonicos. En efecto, cuando se plantea acotar la tasa de interés máxima convencional reduciendo los costos financieros de las PYME, se plantea inmediatamente que se les restringirá el crédito y nadie se preocupa de los efectos sobre el empleo y la rentabilidad asociados.

La PYME es el foco de la política pública de la cartera de economía que de manera reiterada ha impulsado institucionalidad que procure generar una plataforma para el desarrollo de este segmento de la actividad productiva con un éxito muy acotado, sin resultados en términos de modernización e incorporación tecnológica para dar el salto cualitativo en materia de competitividad y productividad. Una de las dificultades más recurrentes es la poca accesibilidad al capital financiero, ya que el sistema opera sobre la base de garantías reconocidas, y una vez constituidas no hay posibilidades de transferir estas garantías de un banco a otro disminuyendo las posibilidades de mejores condiciones de financiamiento o refinanciamiento.

La Inversión Pública en el Presupuesto 2014 no es un componente dinamizador del crecimiento porque se le ha impuesto un verdadero freno presupuestario, disminuyendo el instrumental disponible para enfrentar el ciclo de desaceleración que se ha configurado para el primer semestre de 2014. El gasto privado de inversión se visualiza sin capacidad expansiva de la demanda interna, y por ende se requiere de un elemento autónomo del gasto como podrían ser las obras públicas. El impulso a la matriz energética puede ser un ámbito de acción por la vía de concesiones, así como la reactivación de obras viales de interés para privados.

Los desafíos de regulación

La institucionalidad medioambiental ha estado persistentemente presionada por las materias de desarrollo de la matriz energética. Si de una agenda pro crecimiento se trata, la materia del día es "Energía: ¿cómo romper la inercia para no tener más de lo mismo?". La necesidad de diversificación es evidente para una economía abierta y con claro sesgo exportador, por cuanto la dependencia de los hidrocarburos augura costos unitarios de producción al alza en el mediano plazo, situación que puede

ser contrapesada con la instalación de centros de investigación aplicada que desarrollen tecnología de punta en materia de generación sobre la base de nuevas fuentes que no están explotadas en Chile, como la solar, geotérmica y mareomotriz. Configurar una agenda de innovación para la instalación de conocimiento en este ámbito puede ser un polo efectivo de desarrollo complementario al de la minería en el norte, y al mismo tiempo la localización reviste interés geopolítico en términos de escasez energética en los países vecinos. Los problemas de abastecimiento hídrico de la zona norte es también un problema energético, ya que la desalación del agua de mar es una fuente de desarrollo económico para el norte minero en la medida que el cambio climático ha ido causando estragos en los acuíferos disponibles para el desarrollo productivo y de abastecimiento de la población del líquido vital.

La exploración de un nuevo modelo previsional es relevante para impulsar un mejor desarrollo financiero basado en una real diversificación sistémica, surge como la apremiante orden del día. En efecto, en la actualidad no se dispone de un real sistema de pensiones, sino que de un modelo de ahorro que ha sido muy eficiente para canalizar el ahorro atomizado hacia las corporaciones privadas, que logran zafarse del control de la banca para acceder a los fondos disponibles en la economía mediante la colocación de instrumentos de renta fija o de emisión de capital de riesgo. Los efectos de concentración han sido muy relevantes al momento de analizar las políticas crediticias que controla la banca, consignando los privados de menor tamaño una marginación del sistema financiero local que privilegia operaciones de mayor envergadura, aduciendo economías de escala operativas.

Frente al inmovilismo que supone la invariabilidad tributaria pactada para la Minería del Cobre, se requiere un accionar más proactivo del Estado para lograr una mayor capitalización de los recursos naturales metálicos y no metálicos no cobre. Buscar formas más eficientes para asegurar una adecuada renta compensatoria del proceso extractivo del recurso natural es de primera relevancia para asegurar el desarrollo con cohesión territorial. Son varios los países que han perfilado un modelo de royalty en beneficio de los territorios que sufren la descapitalización de su acervo natural.

La búsqueda de nuevos emprendimientos productivos requiere de acceso a capital de riesgo que permita instalar nuevas capacidades productivas y competitivas, que sean fuente de mayor integración económica con las zonas de desarrollo emergente en el Área Pacífico.